



Informe Legal Nº 104/2020

Letra: T.C.P. - C.A.

Cde.: Nº 121/2020, Letra: T.C.P. - P.R.

Ushuaia, 30 de julio de 2020

# SEÑOR SECRETARIO LEGAL A/C DR. PABLO GENNARO

Viene a la Secretaría Legal el Expediente del corresponde, perteneciente al registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ DENUNCIA PRESENTADA POR AGÜERO ACOSTA E. -PRESUNTAS IRREGULARIDADES DESIGNACIONES OSEF", a fin de tomar intervención y emitir el dictamen jurídico pertinente.

# I. ANTECEDENTES

Las presentes actuaciones fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas el 18 de junio de 2020, en virtud de la denuncia registrada bajo el Nº 8593/2020, suscripta por la señora Elvia AGÜERO ACOSTA, en su carácter de representante de los Trabajadores de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

A través de la mentada misiva, la denunciante manifestó: "(...) I. OBJETO. Que vengo por la presente, y ante la designación que surge del Dto. Pcial. N.º 423/20 en el cargo de Vicepresidente de la OSEF, del CP Leonardo



Martín OLIGIATTI DNI N.º 31623248, como así también ante la designación que surge de la Res. OSEF N.º 732/20 como Coordinador de Sistema y Prensa del Sr. Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO DNI N.º 21483802.

II. FUNDAMENTACIÓN. Que a través del convenio vigente OSEF N.º 78/16 se celebra contrato entre la Obra Social del Estado Fueguino y la Distribuidora Austral de Insumos Médicos SRL — Clínica Los Alamos — figurando como firmante y apoderado de la misma el CP Leonardo Martín OLGIATTI DNI N.º 31623248.

Que el mencionado prestador, representa uno de los más importantes sanatorios en la ciudad de Río Grande, prestando servicios a los afiliados a nivel provincial en diferentes prácticas, encontrándose brindando prestaciones ininterrumpidamente.

Que la Presidencia de la Obra Social permanentemente manifestara frente a quienes suscriben, que las decisiones políticas de la Institución se encuentran supeditadas al juicio del Vicepresidente, dada su condición técnica y 'conocimiento' de causa.

Que la mencionada situación planteada podría considerarse como incompatible entendiendo la necesidad urgente de que la autoridad competente intervenga, a los efectos de resguardar el erario público frente al riesgo de que un funcionario político, que también cumple funciones como prestador de la Obra Social, origine un perjuicio a su patrimonio y funcionamiento.





Que a través de la resolución N.º 732/20 se lo designa al Sr. Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO DNI N.º 21483802 como Coordinador de Sistema y prensa, quien cumpliría doble función como asesor del mayor prestador de la OSEF, el Sanatorio San Jorge SRL de la Ciudad de Ushuaia, dentro del Área de Gestión Económica y Servicios Generales.

Que dicho coordinador se presentó en sucesivas oportunidades junto al Socio Gerente y máximo responsable del Sanatorio San Jorge SRL Dr. Carlos Sánchez Poleman, a los efectos de realizar gestiones ante la Presidencia de la Obra Social, manifestando en varias ocasiones a los trabajadores de la OSEF su pertenencia laboral y existiendo pruebas documentales que así lo acreditan.

Que la mencionada irregularidad se encuadraría en un conflicto de intereses que atenta contra el patrimonio de la Obra Social propiedad de los Trabajadores Públicos, considerando la sensibilidad del área de sistemas respecto a los datos y registros prestacionales, en donde De Carlo sería designado como máximo responsable, encontrándose ejerciendo el control absoluto de la información y asesorando simultáneamente al mayor prestador de la OSEF, pudiéndose observar que las acciones de éste se encontrarían fuertemente influenciadas por su interés secundario".

Por último, la denunciante solicitó se proceda a realizar las gestiones pertinentes con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos legales que tienen como objetivo la transparencia e imparcialidad en los actos públicos; como así también se resguarde los intereses de los afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino.



Con la mentada denuncia, la señora Elvia AGÜERO ACOSTA, acompañó copia simple de la primer hoja del Convenio Marco de Adhesión para Prestaciones Sanatoriales registrado bajo el Nº 78 del 19 de octubre de 2016 y la Resolución Presidencia OSPTF Nº 732/2020 por la que se designó al señor Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO como Coordinador de Sistema y Prensa del Ente.

# II. ANÁLISIS

De manera preliminar, corresponde determinar si este Órgano de Control deviene competente para intervenir en las presentes actuaciones.

Así, el artículo 1º de la Ley provincial Nº 50 dispone: "El Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo de contralor externo de la función económico-financiera de los tres poderes del Estado Provincial. El control comprenderá también a las municipalidades -en tanto no establezcan un órgano de contralor específico en sus cartas orgánicas-, a las comunas, a las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Provincial, municipalidades y comunas y a los entes autárquicos y jurídicamente descentralizados provinciales, municipales o comunales".

Seguidamente, en relación a las funciones que ejerce este Órgano de Control, de conformidad con lo que prevé la Constitución Provincial, el artículo 2º de la citada Ley establece: "(...) a) ejercer el control preventivo de legalidad y financiero respecto de los actos administrativos que dispusieran fondos públicos, así como en aquellos relativos a inversiones de fondos, percepción de caudales





públicos u operaciones financieros patrimoniales del Estado provincial. En ningún caso, la inexistencia de control preventivo obstará el control posterior;

- b) fiscalizar la gestión de fondos públicos otorgados por medio de subvenciones, préstamos, anticipos, aportes o garantías;
  - c) realizar auditorías externas;
- d) informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, antes del día 30 de junio del año siguiente;
- e) juzgar la responsabilidad civil de los estipendiarios del Estado, por daños o perjuicios ocasionados a éste con dolo, culpa o negligencia;
- f) iniciar la acción civil de responsabilidad por daños causados al Estado contra los agentes del mismo que hubieren actuado con dolo, culpa o negligencia, sin que necesariamente haya que sustanciar en forma previa el juicio administrativo;
- g) elaborar un informe anual sobre su gestión a la Legislatura antes del día 30 de junio del año siguiente, debiéndose publicar en el boletín Oficial;
  - h) realizar el examen y juicio de cuentas;
- i) asesorar a los poderes del Estado provincial en materia de su competencia".

Ongot

Por ello, se deduce que la función principal de este Tribunal está relacionada con el control externo de los gastos públicos de la inversión de la renta, ejerciendo de esta manera el control de legalidad pertinente.

Ahora bien, el caso de marras refiere a la conducta que hubiere tomado el Vocal de la Obra Social de la Provincia-quien fuera oportunamente designado por el Poder Ejecutivo-, señor Leonardo Martín OLGIATTI, dado que además de ocupar el cargo de la Vicepresidencia de la Obra Social, sería apoderado y firmante de la Distribuidora Austral de Insumos Médicos S.R.L..

Deviene necesario aclarar en esta instancia que, el 19 de octubre de 2016, el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) y la mencionada sociedad representada por el actual Vicepresidente de la Obra Social, firmaron el Convenio Marco de Adhesión para Prestaciones Sanatoriales, por el término de dos (2) años.

Por Resolución de Presidencia O.S.P.T.F. Nº 435/2019, publicada el 13 de junio de 2019 en el Boletín Oficial Nº 4380, -que en copia se adjunta al presente- se aprobó la renovación automática estipulada en la cláusula décimo octava del Convenio -por única vez- a partir del 20 de octubre de 2018 y por el lapso de dos (2) años, por lo que dicho instrumento se encuentra vigente.

Por otro lado, en la denuncia se expuso la conducta del señor Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO, quien fuera designado como Coordinador de Sistema y Prensa de la Obra Social y a su vez -manifestó la denunciante- cumpliría la función de asesor de la Clínica San Jorge S.R.L. (prestador de la OSEF), dentro del Área de Gestión Económica y Servicios Generales.





En virtud de la denuncia que fuera presentada ante este Órgano de Control, y dado las características de las conductas que se considerarían reprochables por parte de la señora Elvia AGÜERO ACOSTA, como representante de los Trabajadores de la Obra Social del Estado Fueguino, corresponde analizar la cuestión a la luz de la normativa vigente en el orden provincial.

Atento lo denunciado en las presentes actuaciones, existirían -en principio- dos (2) casos de incompatibilidad dentro de la Obra Social y posible conflicto de intereses, que surgiría por los cargos que ocuparen ambos agentes públicos dentro de las mentadas empresas.

Ello, tanto en el caso del señor Leonardo Martín OLIGIATTI como Vicepresidente del Ente y apoderado de la Distribuidora Austral de Insumos Médicos S.R.L. y el señor Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO como Coordinador de Sistema y Prensa, quien cumpliría a su vez la función de asesor dentro del Área de Gestión Económica y Servicios Generales de la Clínica San Jorge S.R.L.

Es dable tener presente, que tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia, la Distribuidora Austral de Insumos Médicos S.R.L. -Clínica Los Álamos- y el Sanatorio San Jorge S.R.L. son los mayores prestadores de servicio de la Obra Social de la Provincia.

En relación con el tópico bajo análisis, cabe traer a colación lo indicado mediante Informe Legal Nº 161/2019, Letra: T.C.P. - S., que expuso: "(...) ¿En que consisten los conflictos de intereses?.



Suele hacerse referencia a las incompatibilidades de los servidores públicos, para referirse genéricamente a diversas situaciones de imposibilidad para ejercer una función o cargo motivada en diversas causas: acumulación de empleos, de retribuciones, antagonismos de intereses, etc.

Entendida como una de las cuestiones más enojosa de la organización administrativa (Bielsa, Rafael, 1960), la configuración de incompatibilidades ha comenzado a ser diferenciada de los casos de conflictos de intereses, al entenderse que son figuras distintas que tienden a prevenir tipos de perjuicios diferentes. Mientras que con las incompatibilidades se protege al erario público frente al riesgo de que resulte imposible cumplir funciones al mismo tiempo o que el Estado pueda abonar más de un salario, en aquellos conflictos se protege la imparcialidad, la igualdad de trato y la independencia de criterio.

Lo cierto es, que referirse a un conflicto de intereses en el ámbito de la función pública presupone una confrontación que se manifiesta en dos planos: uno institucional y otro personal.

El primero surge cuando como resultado de otras actividades o relaciones, la organización no puede prestar servicios imparciales y su objetividad para realizar sus tareas se ve afectada o, también en los casos en que la organización tiene una ventaja competitiva injusta. El conflicto de interés personal en cambio, es la situación que se presenta cuando los intereses privados de una persona interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales (Oficina de Ética de las Naciones Unidas).





La creciente preocupación por prevenir ese tipo de coaliciones, parece estar dada no por la configuración de una irregularidad que afecta la independencia del servidor, sino por constituir una modalidad de actuación que favorece la corrupción. En este punto, la experiencia indica que deben puntualizarse tres aspectos.

El primero, la importancia que tiene la posición del funcionario frente al conflicto, esto es su conocimiento sobre esa situación y los medios que utiliza ya sea para evitarla o para abstenerse de actuar a fin de evitar su configuración. Existe aquí una valoración subjetiva de las circunstancias que como paso previo involucra sus principios éticos.

Luego, es necesario considerar que tales conflictos deben ser analizados con independencia de sus efectos sobre los actos que realiza. De esta forma, la conducta reprochable por actuar no obstante la coalición de intereses, es separable de las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea respecto a la validez o no de las decisiones adoptadas e incluso de las sanciones aplicables a los particulares que intervinieron en la configuración del conflicto.

En tercer lugar, como se advirtió debe entenderse que sin perjuicio de constituir en sí mismas situaciones irregulares, son una vía que permite la configuración de otras conductas corruptas, de las cuales el servidor público y/o otros funcionarios y/o particulares se benefician.

(...) En ese contexto, una de las herramientas utilizadas para prever y controlar las incompatibilidades y los conflictos de intereses, es el de la

appl

obligación impuesta a los funcionarios de declarar no solo su patrimonio sino también las actividades y cargos desarrollados -anteriores o concomitantes con el desarrollo de la función- en los sectores públicos y privados.

En consonancia con las Convenciones contra la corrupción, en la República Argentina la Ley 25.188 -Ética en el ejercicio de la función pública-reguló los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todos aquellos que se desempeñen en la función pública del Estado. Incluyó a los empleados y funcionarios en todos sus niveles y jerarquías, permanentes o transitorios, por elección popular, designación directa, por concurso o cualquier otro medio legal, extendiéndose a magistrados.

# Específicamente establece:

- Para los funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, el deber de incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales, los antecedentes laborales a fin de facilitar el control respecto de los posibles conflicto de intereses.
- Bajo el capítulo de Incompatibilidades y Conflicto de intereses, se incluyen las situaciones de: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; y b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones (...)".





Ahora bien, en relación a la Ley nacional N° 25.188 -Ética Pública-, cabe remarcar que por la inexistencia de una Ley provincial que adhiera a aquella norma de derecho público, entiendo que por la remisión del artículo 26 de la Ley provincial N° 1015, su aplicación debe limitarse al apartado relativo a las incompatibilidades de los funcionarios públicos para contratar con el Estado, en particular, el artículo 13, que dispone:

"(...) Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones".

En efecto, resulta necesario señalar que a los dos requisitos del artículo 26 de la Ley provincial N° 1015, a saber: (1) que los funcionarios y agentes públicos del sector público tengan participación suficiente para formar la voluntad social y (2) que tengan la posibilidad de ejercer una influencia directa o indirecta en los procedimientos de selección establecidos en el marco de dicha Ley de Contrataciones del Estado, deben adicionarse los recaudos del artículo 13 de la Ley de Ética Pública.

Jusel

En este andarivel, deviene necesario remitir al artículo 26 de la Ley provincial N° 1015 referida al "Régimen General de Contrataciones y Disposiciones Comunes para el Sector Público Provincial", que en su parte pertinente reza: "Prohibiciones. No podrán contratar con el Estado provincial:

(...) c) agentes y funcionarios del sector público nacional, provincial y municipal, y las empresas en las cuales aquellos tengan una participación suficiente para formar la voluntad social, en tanto se verifique que pueda ejercer una influencia directa o indirecta en los procedimientos de selección establecidos en el marco de la presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional de Ética de la función Pública 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. Podrán admitirse excepciones a lo aquí dispuesto en las condiciones que fije la reglamentación (...)".

Ello, en un todo de conformidad con lo establecido en la Ley nacional  $N^{\circ}$  25.188 o la que en un futuro la reemplace.

Lo expuesto en los párrafos que anteceden, se complementa con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley provincial Nº 141: "No podrán intervenir en el procedimiento administrativo y deberán excusarse de inmediato los empleados y funcionarios de la Administración que:

a) Tuvieren o pudieran tener interés directo o indirecto en el asunto, o en otro semejante cuya resolución pueda influir en éste; (...)".

Así, en el caso de marras corresponde tener presente que el Convenio suscripto entre la Distribuidora Austral de Insumos Médicos S.R:L. *"Los Álamos"* 





y la Obra Social de la Provincia y su prórroga automática, es anterior a la designación del señor Leonardo Martín OLGIATTI como Vicepresidente del ente.

Por lo tanto, la suscripta entiende que al momento de la firma del mentado Convenio de Adhesión, el señor OLGIATTI, quien actuaba como apoderado de la firma "Los Álamos", no se encontraba dentro de la incompatibilidad prevista en el artículo 26 de la Ley provincial N° 1015 y en el artículo 13 de la Ley nacional N° 25.188.

No obstante, correspondería investigar si el actual Vicepresidente de la Obra Social continúa siendo apoderado de la firma "Los Álamos", y en virtud de ello solicitar información respecto de la debida excusación en la que debería haber incurrido el señor OLGIATTI en todo lo relacionado con las contrataciones de la Distribuidora Austral de Insumos Médicos S.R.L. y la Obra Social, en el marco del Convenio de Adhesión adherido por las partes y en virtud de lo ordenado en el artículo 8° de la Ley provincial N° 141.

Por otro lado, en el caso del señor Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO, atento lo informado por la denunciante, cumpliría funciones de asesoramiento en el Sanatorio San Jorge, y por otro lado, conforme la Resolución Presidencia OSPTF Nº 732/2020, el agente habría sido designado Coordinador de Sistema y Prensa de la Obra Social, lo que en principio no generaría conflicto de intereses ni encuadraría en las incompatibilidades previstas en el artículo 26 de la Ley provincial Nº 1015, dado que el señor GONZALEZ DE CARLO no tendría influencia directa o indirecta en las contrataciones que realizaría la OSEF.

ONZEG

Sin embargo, si podría entenderse que con la actuación del mentado agente en la actividad privada como asesor de la mencionada contratista del Estado, se estaría violentando lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley nacional Nº 22.140, en relación a la siguiente prohibición: "(...) b) dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas de existencia visible o jurídica, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración en el orden nacional, provincial o municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas;

c) recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la Administración en el orden nacional, provincial o municipal (...)".

Asimismo, la mentada ley en su artículo 27, referido a los deberes de los agentes y funcionarios impone que: "(...) *Inciso k) excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad o concurra violencia moral*".

La normativa citada *ut supra* se orienta en el sentido de evitar el conflicto de intereses y las incompatibilidades en que podrían incurrir los funcionarios y agentes públicos.

Particularmente, si bien la mencionada Ley -que resulta aplicable por su similar N° 23.775 ("Ley de Provincialización")- regula la relación de empleo público y no tendría -en principio- injerencia en el régimen de contrataciones del Estado, la Administración se encuentra obligada a actuar en el marco de la juridicidad, resultando imposible obrar violentando disposiciones legales.





Deviene necesario aclarar en este punto que, la Ley nacional Nº 22.140, en su artículo 1º dispone dentro de su ámbito de aplicación, a aquellas personas que en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios en las dependencias del Poder Ejecutivo nacional, incluyendo entidades jurídicamente descentralizadas.

Sin perjuicio de ello, en su artículo 2º establece: "Se exceptúa de lo establecido en el artículo anterior a: a) Los Ministros y Secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios de la Presidencia de la Nación, subsecretarios y las personas que por disposición legal o reglamentaria, ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados (...)".

Por otro lado, el artículo 12 de la Ley provincial Nº 1071 ("Obra Social de la Provincial de Tierra del Fuego OSPTF: Creación"), impone: "La retribución del Presidente será equivalente a la remuneración asignada para el cargo de Secretario de Estado y la de los Vocales será equivalente al cargo de Subsecretario de Estado del Gobierno provincial (...)".

Por lo tanto, dentro de las excepciones previstas por la Ley nacional de Empleo Público, se encontraría el señor Leonardo Martín OLIGIATTI, quien fuera designado por el Poder Ejecutivo provincial como Vocal de la Obra Social y atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley provincial Nº 1071, desempeña el cargo de la Vicepresidencia del Ente, entendiendo así que dicho cargo se equipara al de Subsecretario de Estado.

# III. CONCLUSIÓN

Analizadas las actuaciones, y en virtud de las atribuciones de este Tribunal como Órgano de Control Externo de la gestión económico-financiera, resulta dable señalar que deviene competente para intervenir e investigar lo denunciado por la señora Elvia AGÜERO ACOSTA.

Particularmente, estimo prudente investigar si el actual Vicepresidente de la Obra Social, Leonardo Martín OLGIATTI, continúa siendo apoderado de la firma "Los Álamos", y cual habría sido su intervención en las contrataciones y pagos que se hubieren realizado entre el Organismo que preside y la Distribuidora Austral de Insumos Médicos S.R.L., desde el día de su designación.

Ello, en el marco del Convenio de Adhesión para Prestaciones Sanatoriales, registrado bajo el Nº 78/2016, renovado por Resolución de Presidencia OSPTF Nº 435/2019, y así determinar si se violentó la prohibición dispuesta en el artículo 26 de la Ley provincial Nº 1015.

Consecuentemente, corresponde iniciar la correspondiente Investigación Especial en el marco de lo dispuesto en la Resolución Plenaria Nº 363/2015.

Por último, sin perjuicio del análisis de las presentes actuaciones dentro de éste Órgano de Control, la suscripta entiende necesario darle intervención a la Fiscalía de Estado, respecto del interrogante que se plantea sobre la correcta designación del señor OLGIATTI como Vicepresidente de la Obra Social, quien -a su vez conforme lo expuesto por la denunciante- estaría ocupando el cargo de





TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEDO ANTABTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

"2020-AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO".

apoderado de la firma "Los Álamos", principal prestador de la Obra Social, y del señor Fernando Leonel GONZALEZ DE CARLO, quien cumpliría funciones de asesoramiento en el Sanatorio San Jorge -según lo relatado por la denunciante- y, por otro lado, conforme la Resolución Presidencia OSPTF Nº 732/2020, el agente habría sido designado Coordinador de Sistema y Prensa de la Obra Social.

Por lo expuesto, se elevan las presentes actuaciones para la prosecución

del trámite.

Dra. Daiana Belén BOGADO ABOGADA Mat. Nº 817 CPAU TDF

Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Nº. 15

# USHUAIA. 1 8 MAR 2019

VISTO: el expediente Letra: I, Nº 3720/2016 caratulado "ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO SANATORIAL TDF – DISTRIBUIDORA AUTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL "LOS ALAMOS", del registro de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego; y

# CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el visto tramitó la suscripción del Convenio registrado bajo el Nº 78/2016 entre la Distribuidora Austral de Insumos Médicos SRL LOS ALAMOS y la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego; comenzando su vigencia el día 19 de octubre de 2016 y por el término de DOS (02) años.

Que mediante la cláusula Décimo Octava del citado convenio se establece la posibilidad de renovación automática por única vez y por igual período.

Que no habiendo ninguna de las partes manifestado su voluntad de no renovar automáticamente el convenio, deviene pertinente el dictado del presente acto administrativo por el cual se autorice la renovación por el término de DOS (02) años a contar a partir del día 20 de octubre de 2018.

Que a fojas 350 obra imputación preventiva presupuestaria N  $^{\rm o}$  905 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que bajo el contexto señalado corresponde dictar el acto administrativo para formalizar la renovación automática.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 7º de la Ley Provincial Nº 1071.

Por ello:

# LA PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la renovación automática estipulada en la cláusula Décimo Octava del Convenio registrado bajo el Nº 78/2016 suscripto con la Distribuidora Austral de Insumos Médicos SRL LOS ALAMOS a partir del día 20 de octubre de 2018 y por el término de DOS (02) años. Ello en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA O.S.P.T.F. Nº

0435

/2019.-

Convenios HGM

Monul







# USHUAIA, 1 8 MAR 2019

VISTO: el expediente Letra: J, Nº 3720/2016 caratulado, "ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO SANATORIAL TDF – DISTRIBUTIORA AUTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL "LOS ALAMOS", del registro de la Obra Social de la cia de Tierra del Fuego; y

## CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Ose mediante el expediente mencionado en el visto tramitó la suscripción del Convenio en el producto de la prod

LA PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO RESUELVE;

ARTÍCULO 1°- Aprobar la renovación automática estipulada en la cláusula Décimo Octava del Convenio registrado bojo el № 78/2016 suscripto con la Distribuidora Austral de Insumos Médicos SRL I.OS ALAMOS a partir del día 20 de octubre de 2018 y por el termino de DOS (02) años. Ello ne vintud de los motivos esquesios en los considerandos. ARTÍCULO 2°- Imputar el presente gastos a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- Registrar, comunicar a quienes corresponda Camplido, archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA OS P.T.F. Nº 0435







# USHUAIA, 1 8 MAR 2019

VISTO: el expediente Letra: Q, Nº 6778/2016 carantado "ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO ESPECIALIDADES TOF — DR. QUINTERO IVAN ESPECIALIDA DODONTOLOGÍA", del registro, de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Puego; y

## CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que matinate el espediente mencionado en el visto tramitó la suscripción del Convenir registrado bajo el N° 26/2017 entre el Dr. Iván Rodolfo Quintero y la Obra Social de la Prova registrado bajo el N° 26/2017 entre el Dr. Iván Rodolfo Quintero y la Obra Social de la Prova de 1900 en 19

# LA PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO RESUELVE:

ARTICULO 1°. Aprobar la renovación automática estipulada en la clásusta Décimo Detava del Convenio registrado hajo el N° 26/2017 suscripto con el Dr. Ivári Rodulfo Quinero, a partir del día 8 de marzo de 2019 y por el término de DÚS (02) años. Ello en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°. Imputar el presente gasto a las partidas presupaestarias correspondientes al ejercicio conoficio y financiore on vigencia.

ARTICULO 3°. Regisfarir, comunicar a quienea correspondo. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA O.S.P.T.F. Nº

0437









DE

2<u>07</u>

No 16

# USHUATA, 1 8 MAR 2019

VISTO: el expediente Letra: D. Nº 7/49/2016 caratulado "ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO ESPECIALIDADES TDF — DR. GIRARDET EMILIO ESPECIALIDAD DIAGNOSTICO POR IMÁGIENES", del registro de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fioego; y

CONSIDERANDO:

Que modiante el expediente mencionado en el visto tramitó la suscripción del Conveniu registrado lajo el Nº 14/2017 entre el Dr. Emilio Octavió Girardet y la Obra Social de la Provincia de Tierra del Puego, comenzando su vigencia el día 16 de febrero de 2017 y por el febrimo de DOS (02) años.

Que mediante la clássula Décimo Octava del citado convenio se establece la posibilidad de renovación automática por única vez y por igual período.

Que no habiendo nínguas de las partes manifestado su volustad de ne renovar automáticamente el couvenio, devieno períodos, por el dictado del presente ento administrativo por el cusi se autorice la renovación por el término de DOS (02) años a contar a partir del dia 17 de febrero de 2019.

Que a fojas 131 obra imputación preventiva presuguentaria N \*647 correspondiente al ejercicio económico y financiere en vigencia.

Que hojo el contexto setalado corresponde dictar el acto, administrativo para formaticar la removación automática.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, en vittud de las afribaciones que le confiere el artículo 7º de la Ley Provincial Nº 1071.

For ello:

LA PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO RESUELVE;

ARTÍCULO 1°. A probar la renovación automática estipulada en la cláusula Décinio Octava del Couvenio registrado bajo el N° 14/2017 auscripto con el Dr. Emilio Octavio Girardet, a partir del da 17 de febrero de 2019 y por el fermino de DOS (82) años. Ello en vistual de los motivos expusetos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°. Imputar el presente gastro a las partidas presupuestarias correspondientes al efercicio exendinco y financione en vigencia.

ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.

0436 RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA O.S.P.T.F. Nº





# USHUAIA, 1 8 MAR 2019

VISTO: EI Expediente Letra "O" Nº 4669/13 caratulado: "OYARZABAL MARÍA ALEJANDRA, S'SUBSIDIO FOR CUIDADOS DOMICILIARIOS SEGÚN RES, N.º 1125/15 "; y,

Que mediante el mismo se tramita la continuidad del Subsidio por Cuidados otorgado a favor de la afiliada bajo clave Nº 017-00010320, Señota OYARZABAL

Atignation.

Que la afiliada indicada contaba con la cobertura de cuidados domiciliarios basta el 31 
iembro de 2018, segúa Resolución de Presidencia N.º 1192/2018.

Que por Resolución de Presidencia N.º 115/2018 se precedió a instorizar la 
ción de los arbisidios por cuidados domiciliarios cuyos vencimientos operaban el 311/2/2018 
día 31/30/2019. hasta el día 31/03/2019.

el dia 31/03/2019.

Que, según Informo Socio Ambiental contido pór la Licenciada en Trabajo Social
Que, según Informo Socio Ambiental contido pór la Licenciada en Trabajo Social
stiente de la Delegación Río Grande, tal obra a fojas 162, se considera conveniente renovar el
lio de cuidados domiciliarios por OCHO (08) lioras diarias debido a las necesidades de la
ne.

Que la Directora de Prestaciones Especiales, sugiere otorgar la continuidad del ubsidio a partir del 1º de Abril de 2019 y hasta el 31 de Diciembre de 2019, a razón de OCHO (08)

Que asimismo ha tomado la debida intervención la Dirección General Médica, a fojas

Que habiendo tomado conocimiento de las presentes actuaciones, deviene pertinente la esente acto administrativo.

ues presente acro administrativo.

De la suscripta se encuentra facultada pera el dicitado del presente acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Provincial № 1071 y Decreto PEP N.º 1497/2018

Por cito:

Por cilo:

LA PRESIDENTE DE

LA OBRA SOCIAL PE LA

PROVINCIA DE TIBRRA DEL FUBGO

RESULTE:

ARTÍCULO 1º- Autorizza, a favore de la RÍBLIGA DEL FUBGO

ARTÍCULO 1º- Autorizza, a favore de la RÍBLIGA DEL FUBGO

ARTÍCULO 1º- Autorizza, a favore de la RÍBLIGA DEL FUBGO

ARTÍCULO 2º- LE CAMBRIDA DEL FUBGO

ARTÍCULO 2º- Establecer que la presente tendrá vigencia a partir del día 1º de Abril de 2019 y lusta del 31 de Diciento de 2019.

ARTÍCULO 2º- Establecer que la presente tendrá vigencia a partir del día 1º de Abril de 2019 y lusta del 31 de Diciento de 2019.

ARTÍCULO 3º- Remátir has presentes actuaciones a la Dirección de Prestaciones Especiades, a los fines de la continuidad del trântire en los términos dispuestos en la Disposición A.S.S. Nº 1444/2013.

ARTÍCULO 4º- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar-

RESOLUCION PRESIDENCIA O S. P.T.F. Nº 0 4 3 8

OF-2019-00089020-GDETDF-DGCT#SEGG





Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

"AÑO 2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Nota Interna Nº 1070 /2020

Letra: T.C.P. - S.L.

Ushuaia, 30 de julio de 2020

# AL VOCAL ABOGADO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DR. MIGUEL LONGHITANO

Comparto en todos sus términos el criterio vertido en el Informe Legal Nº 104/2020, Letra: T.C.P. - C.A., suscripto por la Dra. Daiana Belén BOGADO, por el que se concluyó: "(...) investigar si el actual Vicepresidente de la Obra Social, Leonardo Martín OLGIATTI, continúa siendo apoderado de la firma 'Los Álamos', y cual habría sido su intervención en las contrataciones y pagos que se hubieren realizado entre el Organismo que preside y la Distribuidora Austral de Insumos S.R.L., desde el día de su desiganción (...)".

Ello, con motivo de los aportes realizados por la denunciante y la documentación acompañada al presente.

En consecuencia, remito las presentes actuaciones para la prosecusión

del trámite.

Dr. Pablo E. GENNARO
alc de la Secretaria Legal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

